



República de Colombia
Rama Judicial
Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena con funciones de conocimiento
Complejo Judicial Sistema Penal Acusatorio
Centro, Plazoteta de Telecom, antiguo Edificio Cajanal, Oficina 411
Cartagena

Tutela Contra: **BBVA SEGUROS S.A.**

Accionante: **RAMON CATILLO ALMEIDA.**

Derechos fundamentales: Seguridad Social, y Otros

Radicado: **13001-40-04-007-2021-00111-01**

Actuación: **SEGUNDA INSTANCIA**

FALLO DE TUTELA T- 184 DE 10 DE AGOSTO DE 2021

1. OBJETO A DECIDIR

Procede el Despacho a resolver la impugnación impetrada dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor **RAMON CASTILLO ALMEIDA**, quien actúa en nombre propio, contra BBVA SEGUROS S.A, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, dignidad humana, entre otros.

2. HECHOS Y ANTECEDENTES

Los hechos en la presente acción de tutela, fueron resumido por el despacho de instancia de la siguiente manera:

“...Manifiesta el accionante que “Mediante la póliza No 0110043 tomé un seguro de vida grupo deudores”, mediante la cual la accionada se obliga “a sufragar el 100% de las cuotas del préstamo adeudado, además de otras obligaciones inmersas dentro de la póliza”. Señala que “Las cuotas mensuales que debo cancelar a la entidad BBVA respecto de la obligación No 0013 0158 00 9606615108 asciende a la suma de seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos con treinta y centavos. (\$685.617.31)” y que actualmente sufre “una enfermedad degenerativa llamada mieloma múltiple, además de fracturas de vértebras cervicales, la cuales se manifestaron posterior a la toma del seguro o póliza con la entidad”, diagnóstico que lo “incapacitan 100% para laborar”. Asegura que “Constantemente estoy siendo observado por mis médicos tratantes, por lo tanto, todos mis esfuerzos son encaminados a llevar una vida más digna, y no a producir para mi sustento”. Refiere que “raíz de mi enfermedad fui valorado con una PCL del 50% tomando la entidad valoradora como enfermedades para su dictamen MIELOMA MÚLTIPLE y las FRACTURAS CERVICALES, no tomando esta entidad como referencia la afección padecida muchos años atrás y la cual fue superada antes de la toma del seguro”. Advierte que la entidad BBVA “no hacen efectiva la póliza, como quiera que en mi historia clínica de fecha 01 de octubre de 2014 de la salud total eps, contaba con diagnóstico de tumor maligno de tórax, cuestión que es falsa, porque lo que en verdad se había diagnosticado (sic) fue benigno un plasmocitoma extramedular el cual fue superado”. Afirma que su “situación económica es paupérrima, estando a la merced de mis allegados para mi subsistencia, toda vez que mis dolencias me impiden laborar” y que cada vez le es más difícil cumplir con sus obligaciones “por mi estado de salud terminal, a duras penas llego a cancelar los servicios públicos”, por lo que la negativa de la accionada “a hacer efectiva la póliza, esta (sic) afectando gravemente mi salud, como quiera que la seguridad social en salud me corresponde a mi como persona natural realizar los aportes , los cuales cada vez es más difícil cumplir con los mismos...”

Por lo anterior el accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales, y en consecuencia se le ordene a la demandada lo siguiente:

“...BBVA cancelar la asistencia a las personas por desempleo y/o incapacidad total y temporal correspondiente al pago de 100% de las cuotas del prestamos adeudado hasta 6 cuotas. ...”

Por otra parte, se tiene que, mediante auto del día 06 de junio de 2021 el despacho de instancia resolvió admitir la acción de tutela.; Así se tienen el informe rendido por aquella.

La accionada **BANCO BBVA S.A.**, rindió el respectivo informe de tutela en el cual manifestó:

“...La señora Olga Quiñonez Cañón, quien se anuncia como Apoderada Especial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., Banco BBVA Colombia S.A., precisa a este despacho que “En lo medular la protesta del accionante se refiere a la objeción presentada por la aseguradora frente al pago de una indemnización, tema sobre el cual el Banco BBVA no tiene injerencia alguna. Ha de verse que la objeción proviene de la entidad aseguradora más NO del Banco conforme lo afirma el accionante en el hecho noveno de la demanda constitucional”. Agrega que “el asunto objeto de debate constitucional tiene que ver con una actividad que la entidad que represento no está facultada para desarrollar, como lo es la actividad económica aseguradora, tal como se desprende de los artículos 2º, 6º y 7º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993, modificado por la ley 795 de 2003” y que “el Banco BBVA Colombia es una entidad distinta de la aseguradora BBVA Seguros. Por tanto, el Banco BBVA Colombia no está obligado constitucional, legal, ni actualmente a reconocerla indemnización de un siniestro derivado de la suscripción y ejecución de un contrato de seguros, dado que no fungió como aseguradora, sino como entidad que otorgó productos de crédito”. Aclara que “lo atinente a las coberturas del seguro es un tema totalmente ajeno al Banco BBVA puesto que no está dentro de su objeto social mercantil, debiéndose discutir lo inherente a tales amparos o garantías directamente con la aseguradora y mediante un proceso verbal declarativo, en el que el Juez Civil, con el acopio de los elementos de convicción conducentes y pertinentes, efectúe un riguroso y juicioso escrutinio en punto a la validez, vigencia, coberturas, amparos del contrato de seguro, terminación, las eventuales novaciones del contrato de seguro, sus alcances, las nuevas pólizas, devolución de dineros etc, elementos todos estos que no pueden ser dilucidados de manera seria y responsable, en un angustioso término de 10 días que tiene el fallador de tutela” e insiste en que su representada “no es la llamada a solucionar las pretensiones elevadas por el promotor, habida cuenta que no es el deudor de la prestación amparada por las pólizas, toda vez que, se trata de un seguro de vida grupo deudores, de unos créditos desembolsado por la entidad que represento”, Solicita “no tutelar los derechos fundamentales que la accionante

alega conculcados, toda vez que como se indicó anteriormente, el Banco BBVA Colombia S.A. no ha desplegado actuación tendiente a desconocer sus garantías constitucionales ...”

Por su parte, la compañía **BBVA SEGUROS S.A.**, informó sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela lo siguiente:

“... Manuel José Castrillón Pinzón, en su calidad de Representante Legal Judicial de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., rindió el informe requerido por este despacho. Manifiesta que “la parte accionante ni siquiera aportó la cantidad de ingresos y gastos mensuales o erogaciones que tiene para demostrar que está en imposibilidad económica de acudir a la justicia ordinaria, pues simplemente se creó una situación de mendicidad para evitar ser la parte vencida en un proc eso por la palmaria reticencia en que incurrió”. Indica que “al contrato de seguro objeto de la presente acción de tutela le es aplicable la legislación comercial colombiana, la cual consagra la obligación para el Asegurado de declarar sinceramente el estado del riesgo al momento de contratar el seguro, en atención al principio de la buena fe, característico de este contrato”, lo que “reviste la mayor importancia dentro del contrato de seguro, por cuanto se erige como un deber fundamental, en atención al principio de la buena fe, que rige con mayor preponderancia frente a este contrato”. Señala que “la aseguradora no exigió la realización de exámenes médicos de la asegurada (sic) en asunto, ni solicitó historia clínica para acceder al seguro que respaldaba la obligación en referencia, debido a que la aseguradora no está obligada a ello. Sin embargo, mi representada sí le propuso diligenciar una declaración de asegurabilidad a objeto de verificar el estado de salud; dependiendo de esta información, la aseguradora tenía la potestad de practicar exámenes médicos a fin de conocer la realidad sobre el estado físico y así tomar una de tres decisiones: aceptar el riesgo en condiciones normales, imponer condiciones de primas más onerosas o, rechazar el seguro propuesto. Como en la declaración de asegurabilidad no se declaró ningún antecedente médico relevante, ni se consignó ninguna patología importante en curso, la aseguradora decidió aceptar el seguro en condiciones normales, vale decir se expidió la póliza como un riesgo normal, bajo el principio de la buena fe”. Insiste en que “en este caso no se declararon las enfermedades arriba indicadas y, que de haberse reportado seguramente no se hubiese aceptado la expedición del seguro o hubiese quedado aplazada y supeditado a los resultados de los exámenes que la Compañía hubiese realizado, pero como declaró no padecer de ninguna afección o dolencia, se expidió la póliza como un riesgo normal”. Precisa que “la aseguradora en virtud del principio de la buena fe que gobierna el contrato de seguro, no presume que el asegurado este faltando a la verdad o tratando de engañar cuando diligencia el cuestionario, sino que se confía en que las respuestas consignadas en el mismo, son del todo ciertas. Si posteriormente se determina que el asegurado conociendo un hecho importante relativo a su salud, no declara, se configura la reticencia, que da lugar la objeción del pago del seguro”. Resalta que “la objeción no se fundamenta en que las enfermedades o hechos causantes de la reclamación tengan alguna relación con la(s)

enfermedad(es) padecida(s) y no declarada(s) por el asegurado al momento de tomar el seguro, sino porque de acuerdo con el Artículo 1058 del Código de Comercio el asegurado está obligado a declarar sinceramente todos los hechos o circunstancias relevantes que determinaban su estado del riesgo, según el cuestionario que le fue propuesto por el asegurador, hechos que no fueron atendidos correctamente al obviar mencionar las enfermedades citadas anteriormente; enfermedades que por su connotación tenían que ser de conocimiento para la aseguradora para determinar el real estado del riesgo en el momento de la suscripción". Precisa que "con independencia de que la causa de su incapacidad haya sido por un hecho diferente a la enfermedad conocida y no declarada, esto no excluye la obligación que le asistía al asegurado de haber declarado fehacientemente sus antecedentes médicos relevantes". Considera que "la solicitud en virtud de la cual se pretende el reconocimiento de aspectos meramente patrimoniales, en tratándose de situaciones derivadas de un contrato mercantil, no pueden ventilarse a través del mecanismo de la acción de tutela, toda vez que éste elemento fue implementado para proteger situaciones de amenaza inminente donde no haya más mecanismos de defensa para dicha protección. De hecho, no ventilar esta situación ante el juez natural, sería violatorio del debido proceso de la aseguradora puesto que contamos con material probatorio para avalar jurídicamente la nulidad del contrato de seguro por reticencia para este caso". Concluye que "la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia no ha vulnerado derecho fundamental alguno pregonado por la accionante y que su negativa al pago del seguro obedece a circunstancias plenamente advertidas en el recorrido normativo del artículo 1058 del Código de Comercio, siendo evidente que el incumplimiento de las cargas propias del asegurado deberá asumirlas el señor Es, quién como se ha mencionado en múltiples ocasiones, no declaró sinceramente sus antecedentes médicos" y que existe otro mecanismo de defensa judicial "vía principal y directa para la discusión del derecho y la acción de tutela sólo operará como mecanismo subsidiario y excepcional para la protección inmediata de las garantías constitucionales fundamentales que no tengan otro medio de resguardo". Asegura que "fluye palmario que cualquier discusión inherente a contrato de seguro objeto de controversia, deberá ser asumida por los jueces ordinarios, quienes, con los elementos de convicción conducentes y pertinentes, y útiles que deberán dilucidar si hay viabilidad en el pago del seguro". Solicita se "RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela" y que se ordene al accionante "acudir a la jurisdicción ordinaria, toda vez que la acción de tutela no se puede constituir como mecanismo sustituto de las vías ordinarias, y menos aun cuando no existe prueba si quiera sumaria de la vulneración a los derechos fundamentales en contra de esta aseguradora..."

3. DEL FALLO IMPUGNADO

Mediante fallo de fecha 21 de junio de 2021, el Juzgado 7° Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, resolvió:

“...Primero. Tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a la vida digna y a la seguridad social del señor Ramón Castillo Almeida contra BBVA Seguros S.A., por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. Segundo. Ordenar a BBVA Seguros S.A. que en el término de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo, realice los trámites correspondientes para hacer efectivo el amparo contenido en la póliza del Seguro Vida Grupo Deudor No. 0110043 (VGDB-154), contratada por el señor Ramón Castillo Almeida. Tercero. Desvincular del presente trámite al Banco BBVA S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. ...”

Al considerar, que el accionante cumplió, y acreditó los requisitos de la jurisprudencia, para la procedencia de la acción de tutela, como también encontró probado el abuso de la posición dominante de la parte accionada en la relación contractual la cual causó una vulneración a los derechos fundamentales del accionante.

4. DE LA IMPUGNACION

La parte interviniente BBVA SEGUROS S.A, recurrió la decisión de instancia, señalando que presentaría con posterioridad escrito contentivo de los argumentos de alzada. Empero, el despacho no advierte el aducido memorial en la plataforma TYBA., por lo que se infiere, no fue presentado.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En virtud de lo dispuesto en el Art. 32 del decreto 2591 de 1991, corresponde al Juez de segunda instancia, estudiar la impugnación y confrontarla con el fundamento probatorio y la decisión proferida en primera instancia; teniendo incluso la facultad de ordenar pruebas o de solicitar informes. Así, dentro de los 20 días siguientes, el Juez decidirá si revoca el respectivo fallo o si por el contrario encontrándolo ajustado a Derecho, lo confirma. En todo caso, una vez en firme la decisión, se procederá al envío del expediente a la Honorable. Corte Constitucional para su eventual revisión.

En este contexto y considerando los antecedentes, el fallo de instancia y la intención de la impugnación, pasará el despacho a exponer los preceptos constitucionales relativos a la procedencia de la acción de tutela, para resolver el caso concreto.

Así las cosas, es necesario precisar que, la acción de tutela es un mecanismo garante de la protección de los derechos fundamentales de las personas, fue instituido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, su íntegro cumplimiento posibilita el desarrollo del estado social de derecho mediante la protección inmediata de los derechos imprescindibles de los ciudadanos.

Lo que se busca con este mecanismo de amparo constitucional es la protección real del derecho fundamental en amenaza, vulneración o violación de un agente público o particular para hacer cesar tal actuación o exigirle que se abstenga de realizarla permitiendo el pleno, cierto, garantizado y efectivo objeto del mismo.

La tutela es un instrumento de carácter subsidiario y residual, preventivo y no declarativo, al que tan sólo se puede acudir cuando quien pretenda hacerlo no cuente realmente con otro medio de defensa judicial para proteger sus derechos fundamentales, o cuando, teniéndolo, sin embargo, éste no ofrece garantía de celeridad y eficacia para hacer que cese la violación, o para evitar un perjuicio irremediable.

Debido al carácter excepcional, del instrumento de amparo constitucional para la protección de los derechos fundamentales, la acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano.

Para la tutela los derechos fundamentales argüidos en las demandas, se hace necesario demostrar su inminente peligro o que su vulneración está acaeciendo, de otra manera debe el actor acudir a los jueces naturales de cada tipo de proceso para lograr el cometido de sus pretensiones.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

La acción de tutela como mecanismo transitorio, puede ser utilizada cuando el afectado, aun contando con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales, este no resulte tan expedito como la acción de amparo para evitar el sufrimiento un perjuicio irremediable, por lo que sólo la inminencia de este último haría posible tramitar la petición de tutela para proteger de manera transitoria al afectado.

Sobre este preciso tópico, ha enseñado nuestro máximo órgano de cierre constitucional, lo siguiente:

“Cuando dicha acción se ejerce como mecanismo transitorio, es necesario que el afectado en alguno de sus derechos constitucionales fundamentales acredite ante el juez de tutela que se encuentra en una situación de tal ‘gravedad’, que el amparo es ‘urgente e impostergable’, pues de no otorgarse, se producirá en forma ‘inminente’ la violación del derecho.

En efecto, según la jurisprudencia de esta Corporación, para que el perjuicio pueda calificarse de irremediable, es indispensable acreditar los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia, ‘pues de otra manera no se violan ni amenazan los intereses del presunto afectado’. En segundo lugar, el daño debe ser grave, ‘sólo la irreparabilidad que recae sobre un bien de gran significación objetiva para la persona puede ser considerado como grave.’ Además, el perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que ‘se haría inevitable la lesión de continuar una determinada circunstancia de hecho’. Y ante esa inminencia, ‘las medidas que se

requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes", impostergerable" 1. Sentencia T- 418 de 2000".

En este sentido la acción de amparo es de carácter residual, en la medida en que complementa aquellos elementos previstos en el ordenamiento jurídico que no son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales, además, se hace necesario que la misma se invoque como mecanismo transitorio.

Conforme a lo anterior se puede deducir que 1) la tutela no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho; 2) No puede ser utilizada para revivir oportunidades procesales vencidas como consecuencia de la inactividad del interesado, 3) no constituye un último medio judicial para alegar la vulneración o afectación de un derecho, cuando las decisiones que se atacan no son de su agrado.

En desarrollo del principio de subsidiariedad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expone que, si bien existen otros mecanismos de defensa, la acción de tutela procederá excepcionalmente en los siguientes eventos:

- a) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no sean suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
- b) Cuando, aunque tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

Cuando el accionante sea un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas), y por lo tanto su situación requiera de particular consideración por parte del juez de tutela.²

6. EL CASO CONCRETO

Tal y como se expuso en el acápite de antecedentes, la acción de tutela fue presentada por el señor **RAMON CASTILLO ALMEIDA**, quien actúa en nombre propio, contra BANCO BBVA S.A - BBVA SEGUROS S.A, al considerar que sus derechos fundamentales, a la vida digna, seguridad social, entre otros, han sido vulnerados por las entidades en mención, ante la negativa de ejecutar la póliza de seguro que garantiza las obligaciones dinerarias contraídas con las demandadas en caso de acontecer la muerte o la invalidez.

Por otra parte, se anota que, la parte interviniente BBVA SEGUROS S.A, manifestó que la presente acción de tutela resulta ser improcedente, toda vez que, las

¹ Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-356 de 1995. MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero

² Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.

pretensiones reclamadas por el actor son estrictamente del orden comercial, y se debe acudir a la justicia ordinaria.

Argumenta las razones del porqué, no ha ejecutado la póliza de seguro en favor del accionante, para lo cual cita el artículo 1058 del código de comercio.

Por otra parte, la entidad demandada BANCO BBVA S.A, en respuesta dada al informe solicitado por el juez de instancia manifestó que, lo atinente a las coberturas del seguro es un tema totalmente ajeno al Banco BBVA, porque no hace parte de su objeto social mercantil.

Indicando que, las pretensiones de la acción de tutela, deben dirimirse mediante un proceso verbal declarativo, ante el que el Juez Civil, con el acopio de los elementos de convicción conducentes y pertinentes, el cual deberá realizar un riguroso y juicioso escrutinio en punto a la validez, vigencia, coberturas, amparos del contrato de seguro, terminación, las eventuales novaciones del contrato de seguro, sus alcances, las nuevas pólizas, devolución de dineros etc.

En ese orden de ideas, el a-quo, decidió amparar los derechos fundamentales en la presente acción de tutela, por considerar probados los hechos y las pretensiones alegadas por el accionante.

El punto de discusión en el presente asunto se centra en determinar si las pretensiones del accionante encaminadas proteger los derechos fundamentales a la Seguridad Social, Mínimo Vital, Dignidad Humana, entre otros, pueden ser ventiladas y resueltas mediante la acción constitucional de tutela, para ello se hace imperativo traer a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional la cual, frente al tema en discusión, señaló lo siguiente:

*“(...) La norma superior ha sido terminante al señalar que, **salvo el caso del perjuicio irremediable, no cabe la tutela sino en aquellos casos en los cuales el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, es decir cuando no hay un procedimiento aplicable ni un juez competente, según la normatividad ordinaria, para proteger de manera efectiva y urgente el derecho fundamental afectado o puesto en peligro.** (...)”*

*Ahora bien, **el juez de tutela podría entrar a resolver un caso concreto en el cual fuera patente e indudable la violación o la amenaza de un derecho fundamental, con miras a velar por la vigencia concreta de los postulados constitucionales, pero sólo podría hacerlo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,** dejando la decisión final en manos de la jurisdicción correspondiente. (...)”³ (Subraya y negrilla fuera del texto)*

Pues bien, en el caso bajo estudio, para el despacho resulta acertada la decisión tomada por el A Quo de amparar los derechos fundamentales invocados en la presente acción de tutela, toda vez que, de los hechos narrados en la demanda, y

³ Sentencia T-286 del 17 de junio de 1984 – expediente N° 32467; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

las pruebas documentales allegadas por el accionante, conllevan el suficiente poder demostrativo, nótese, que se acreditó por parte del actor mediante la historia clínica, el dictamen de la pérdida de capacidad laboral en el porcentaje del 50%, que soporta su estado actual de salud, y los ingresos actuales, circunstancias, suficientes para no poder continuar con el pago de sus obligaciones, sin que se vea afectado el derecho al mínimo vital y móvil, y en consecuencia la puesta en peligro o amenaza de la dignidad humana.

Si bien, en principio podría resultar evidente que estamos frente a unas reclamaciones de índole comercial, siendo el competente para dirimir las el Juez de la Jurisdicción Civil, no puede dejarse de lado, tal como lo enseña la jurisprudencia, que, en algunas ocasiones, como es el caso de marra, los instrumentos ordinarios de defensa judicial no son suficientemente, idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados.

Ahora bien, la parte accionada BANCO BBVA S.A - BBVA SEGUROS S.A, no puede sustraerse al cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas con sus clientes, sin que antes hayan promovido las acciones legales necesarias que así la faculten, toda vez que, no se allegó prueba siquiera sumaria que se haya iniciado proceso de resolución de contrato en contra del accionante.

Así, para este despacho los argumentos dados por BANCO BBVA S.A - BBVA SEGUROS S.A, consistentes en que el accionante, ya cuentan con un juez natural instituido por la Ley para dirimir el problema jurídico planteado con la presente acción de tutela no son de recibos en esta instancia.

En ese mismo orden de ideas, y por venir acreditados los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia, la acción de tutela resulta ser procedente, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, toda vez que, este último, para esta funcionaria no resulta ser idóneo para proteger los derechos invocados.

En consecuencia, si las entidades BANCO BBVA S.A - BBVA SEGUROS S.A., pretende sustraerse de las obligaciones contractuales contraídas en las pólizas de seguros, serán estas ultimas las que deberán promover, ante los jueces civiles las acciones judiciales que consideren procedentes para dar por terminadas las relaciones pactadas.

Así las cosas, este despacho considera que, las razones del juez de primera instancia de considerar amparar los derechos constitucionales solicitados por el accionante señor RAMON CASTILLO ALMEIDA, se ajustaron a derecho, por ello se deberá confirmar la decisión recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero del Circuito de Cartagena, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

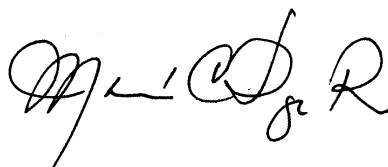
7. RESUELVE:

Tutela Contra: **BANCO BBVA S.A.**
Accionante: **RAMON CATILLO ALMEIDA.**
Derechos fundamentales: Seguridad Social, y Otros
Radicado: **13001-40-04-007-2021-00111-01**
Actuación: **SEGUNDA INSTANCIA**

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de fecha 21 de junio de 2021, emanado del Juzgado 07° Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, interpuesta por el señor el señor **RAMON CASTILLO ALMEIDA**, quien actúa en nombre propio, contra, BBVA SEGUROS S.A, tal como se adujo en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Notificar el presente fallo y remitir la presente decisión a la Honorable Corte Constitucional, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del mismo, para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. C. D. R.', likely representing Maria Consuelo Daza Ramirez.

MARIA CONSUELO DAZA RAMIREZ
JUEZ (E)